

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El seis (06) de octubre de dos mil veintidós (2022), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **LUZ DOLLY SÁNCHEZ CORREA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** (en adelante PORVENIR S.A.), la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A** (en adelante COLFONDOS S.A.) y la **NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES** (en adelante MHCP) tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-005-2017-00191-01.

AUTO

De conformidad con la documentación allegada al plenario por los apoderados judiciales de PORVENIR S.A. y de COLFONDOS S.A. junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia, se reconoce personería a la sociedad BEATRIZ LALINDE ABOGADOS S.A.S. para que continúe representando a PORVENIR S.A. en este proceso como apoderada principal, portadora de la T.P. 15.530 del C. S. de la Judicatura. Así mismo, se reconoce personería al abogado JAIR FERNANDO ATUESTA REY, portador de la T.P. 219.124 del C. S. de la Judicatura, para representar a COLFONDOS S.A. como apoderado general.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos,

1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la ineficacia de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante

RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se condene a PORVENIR S.A. a continuar pagando la pensión de vejez que le fue reconocida en el RAIS hasta que COLPENSIONES reconozca y pague la pensión en los términos del Dcto. 758 de 1990.

Así mismo solicita que COLPENSIONES pague el reajustarle de dicha prestación en los términos del Decreto 758 de 1990, desde la fecha del disfrute para que posterior al pago del reajuste, continúe pagando el valor de la mesada pensional a la que tiene derecho en el RPM, con los intereses del Art. 141 de la ley 100 de 1993.

Igualmente solicita que se condene a PORVENIR S.A. al pago a la demandante de los perjuicios morales por el sufrimiento y la angustia que ha padecido por el tema pensional, los que calcula en 100 smmlv.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata la actora que nació el 16 de abril de 1957 y se afilió al RPM administrado en ese momento por el extinto ISS el año 1980.

Indica que el día de la reunión en su lugar de trabajo los asesores de COLFONDOS S.A. le dijeron que el ISS se iba a acabar, que si no se trasladaba perdería lo cotizado para la pensión de vejez, que en el fondo privado podía pensionarse a la edad que ella eligiera, y que la pensión era más alta en COLFONDOS S.A. que en el ISS.

Aduce que las AFP demandadas nunca le brindaron información sobre las diferencias del RAIS y el RPM, y no le explicaron las modalidades de pensión que tiene el RAIS, como tampoco le comunicaron que la pensión de vejez en el RAIS estaba supeditada al capital acumulado y los rendimientos, no le explicaron cuáles eran las consecuencias si no acumulaba el capital mínimo.

Manifiesta que no le explicaron que la edad de los beneficiarios incide en el reconocimiento de la prestación, y que los fondos privados no le explicaron la importancia del derecho de retracto, no le informaron qué era un aporte voluntario, tampoco le comunicaron que en el caso de escoger una pensión anticipada al redimirse de manera anticipada el bono, disminuiría su valor y en razón a ello se causaría un impacto en el valor de la mesada pensional.

Señala que, no le explicaron que el bono pensional en el caso de las mujeres se redimía a los 60 años de edad, y no le informaron que el valor que se consigna en la cuenta de ahorro individual no es el 100% aportado, ya que una parte se destina al pago de los gastos de administración y del fondo de solidaridad, y no le realizaron proyección de la pensión de vejez.

Cuenta que, al momento del traslado, a las AFP demandadas no le explicaron las ventajas y desventajas del traslado, tampoco le comunicaron que al ser beneficiaria del régimen de transición y tener más de 700 semanas cotizadas en el RPM no era viable su traslado, es decir, que los fondos nunca le realizaron un estudio particular y concreto de su caso, y no le explicaron ni tampoco le advirtieron que si se trasladaba de régimen pensional perdería el régimen de transición. No le informaron que era la pensión de garantía mínima y sus requisitos, no le comunicaron como era la forma de pensionarse en el RAIS.

Argumenta que, en el año 1999 fue abordada por personal de COLPATRIA S.A., quienes le manifestaron que se trasladara para dicho fondo porque iba a recibir mejores rendimientos y se podía pensionar más rápido, pero no le dieron un buen consejo para que se regresará al RPM, toda vez que era lo más beneficioso para ella por ser parte del régimen de transición.

Expresa que ninguno de las AFP demandadas le entregaron copia de los formularios de afiliación a esos fondos.

Aduce que, que actualmente goza de la prestación económica de vejez otorgada por PORVENIR S.A.

Arguye que, le informó a PORVENIR S.A. que no redimiera el bono pensional a los 60 años en razón a que iniciaría el proceso de ineficacia de la afiliación al RAIS.

Relata que, en ocasiones anteriores presentó derecho de peticiones ante las demandadas agotando así, la vía de la reclamación administrativa.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

El *a quo* despachó de manera desfavorable todas las pretensiones de la demanda, declarando prosperas las excepciones de IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD POR EXISTENCIA DE PENSIÓN RECONOCIDA A LA DEMANDANTE formulada por la apoderada de PORVENIR S.A.; la de INEXISTENCIA DE LA NULIDAD DE

TRASLADO DE RÉGIMEN, formulada por la apoderada de COLPENSIONES; y, la denominada INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN propuesta por la apoderada de COLFONDOS S. A., absolviendo a las demandadas de la totalidad de las pretensiones dirigidas en su contra por la actora.

Finalmente, condenó en costas a la demandante, en la suma de \$1'817.052, que deberá ser cancelados a cada una de las demandadas a razón de \$454.263. Igualmente condenó a PORVENIR S.A. a pagar costas procesales a la demandante ante la improsperidad de las pretensiones de la demanda de reconvención que formuló en contra de la demandante, fijan las agencias en derecho en cuantía de \$454.263.

Para fulminar condena, el *a quo* consideró que la Corte Suprema de Justicia tiene fijada una línea jurisprudencial sobre el tema de la afiliación a un régimen pensional que se sintetiza en la obligación de brindar una información completa, suficiente, idónea y comprensible sobre las características de los regímenes, determinando e informando la conveniencia e inconvenientes de uno y otro régimen, y la inversión de la carga de la prueba de la información brindada en cabeza de las AFP.

Luego, señaló que en el proceso no se probó parte de las AFP que, al momento de la afiliación de la demandante, estas hayan cumplido con el deber legal de otorgar una explicación integral sobre la regulación de los regímenes pensionales, las ventajas y desventajas, resultando insuficiente como prueba de la existencia de un consentimiento suficientemente informado la suscripción del formulario de afiliación pre impreso.

De otro lado, manifestó que como la demandante ya fue pensionada en el RAIS, se encuentra en una situación consolidada, es decir, un hecho consumado, respecto del cual no es posible revertir los efectos causados o generados con el traslado de régimen pensional, por lo que no resulta posible la declaratoria de la ineficacia solicitado en la demanda y en consecuencia no se puede revertir los efectos del traslado, dejando sin valor el mismo, ordenando las restituciones mutuas como es la conducta normal y regular que la judicatura y que se viene sosteniendo cuando se trata solamente de un afiliado.

En razón a lo anterior, se declaran prósperas las excepciones de improcedencia de la nulidad por existencia de pensión reconocida a la demandante propuesta por PORVENIR S.A. en la contestación de la demanda, al igual que inexistencia de nulidad del traslado por estar la actora frente a una situación consolidada como es estar pensionada en el

RAIS, excepción que fue formulada por la apoderada judicial de COLPENSIONES. Igualmente declaró próspera la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por COLFONDOS S.A.

Expuso que, con el hecho de que la demandante se haya pensionado en el RAIS, cerró su ciclo y tiene un *statu quo* que impide que se reviertan los efectos de un traslado, el que considera que tiene defectos en cuanto al consentimiento que fue dado por la actora para que este se realizara.

Respecto de los perjuicios morales señaló que son los únicos pedidos en la demanda, los que no son procedentes, en la medida en que al no ordenarse que COLPENSIONES reciba a la demandante, por consecuencia debe entenderse que no tiene por qué COLPENSIONES reconocer y pagar la pensión de una persona que no es afiliada al RPM, antes por el contrario la demandante superó el umbral, que es el proceso de consolidación del derecho con el momento cumbre en el que solicitó la pensión ante PORVENIR S.A. y es por ello que no es posible regresar a la demandante al RPM.

2. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

La sentencia fue apelada por el apoderado judicial de la demandante argumentando que comparte la decisión del juez de primera instancia al concluir que en el proceso se acreditó la falta de información suministrada a la demandante, y en ese orden de ideas de acuerdo con lo manifestado por la jurisprudencia hay una ineficacia del traslado de régimen pensional, en razón a que las AFP demandadas incumplieron con el deber de información, y que se aparta de la decisión proferida por el *a quo* ya que este, manifiesta que no se puede acceder a las pretensiones de la demanda porque la señora Luz Dolly Sánchez Correa tiene la calidad de pensionada en el RAIS.

Aduce que, PORVENIR manifiesta que la demandante era beneficiaria de una pensión de garantía mínima, sin embargo en memorial y en oficio del 16 de mayo del 2017 se le dijo a PORVENIR S.A. que no se autorizaba la redención de bono pensional, con la finalidad de que no se afectaran terceros, sin embargo cuando la demandante diligencia los documentos para una pensión de garantía mínima, no cumplía con los requisitos o presupuestos exigidos para esta pensión, pues si bien el articulado exige un total de 1150 semanas cotizadas y una edad de 57 años, para la época en la que la actora solicitó la prestación económica en PORVENIR S.A. estaba vigente el artículo 84 de la Ley 100 de 1994, que determinaba quiénes eran excluidos de la pensión de garantía mínima, en concordancia con el Decreto 832 de 1996, y eran excluidas

aquellas personas que devengaran o recibieran rentas superiores a lo que se fueran a recibir de pensión de garantía mínima y como consta en el historial laboral de la actora el IBC de esta era más del salario mínimo legal mensual vigente para ese momento, inclusive en el folio 396 del documento 01 del expediente digital se hace la relación de cuánto devengaba la demandante para esa época, con todo lo anteriormente expuesto queda demostrado que la señora Luz Dolly Sánchez Correa no era candidata para otorgarle una pensión de garantía mínima.

Considera que las AFP demandadas han incumplido los mandatos legales y le atribuyen la responsabilidad a la demandante.

Argumenta que, si bien se trata de un status consolidado, en el año 2008 o 2009 la MP ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN en la sentencia 31314 del 06 de diciembre de 2011 determinó una solución salomónica remitiéndose al Código Civil e indicando que las administradoras deben responder por los deterioros que el bien administrado haya sufrido, en razón al título de culpa es que se les indilga dicha responsabilidad.

Considera que, en el presente proceso se dan los presupuestos tal y como lo interpretó el despacho que esa diferencia pensional que se solicita en la demanda, debe ser a cargo de PORVENIR S.A. porque el despacho apunto a esa situación, y en ese orden de ideas se debe condenar a COLFONDOS S.A. y a PORVENIR S.A. a pagar a título de culpa la diferencia pensional dada la responsabilidad establecida en el artículo cuarto del Decreto 696, en razón a que la demandante era beneficiaria de régimen de transición y del Decreto 758 de 1990 y las entidades nunca le informaron cuáles eran los impactos negativos del traslado de régimen pensional, por tal razón, solicita al Tribunal se de aplicación la normatividad ya antes referenciada e inclusive al Decreto 719 de 1994 y se revoque en su totalidad la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de responsabilidad a título de culpa.

3. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados judiciales de la parte demandante, de PORVENIR S.A. y de COLFONDOS S.A. allegaron escrito de alegatos de conclusión en los que anotaron resumidamente lo siguiente:

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE.

Señores magistrados en el presente proceso se formulan negaciones indefinidas las cuales no han sido desvirtuadas por la entidad demandada, En los hechos de la demanda, artículo 167 del código general del proceso.

La Corte Suprema de Justicia ha sido clara, pacífica frente al deber de información, igualmente a quien corresponde la carga de la prueba, además también ha sido pacífica la jurisprudencia en enseñar que el acto **ineficaz no se sana ni se convalida por otro acto jurídico ni por prescripción, como tampoco por actos de relacionamiento, ver sentencia, SL1055-2022.**

Ahora bien, en el presente proceso está acreditado que la entidad demandada no cumplió con el deber de información, sin embargo, nos encontramos frente a una pensionada.

La demandante mediante derecho de petición informo a la entidad demanda **no tramitara la redención de bono pensional toda vez que había iniciado proceso de inejecución lo anterior con el propósito de no afectar a terceros de buena fe.**

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Magistrada, ponente, **CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, SL 373-2021, Radicación n.º 84475, Acta 5, Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021),** trato el tema de un pensionado donde declaro fundado el cargo planteado frente **a la inejecución por incumplimiento al deber de información es decir que si es procedente,** consideración de la cual me aparto muy respetuosamente, toda vez que la misma corte suprema de justicia se contradice con su misma línea jurisprudencial por ejemplo las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL3464-2019 y CSJ SL2877-2020, donde se ordena devolver los gastos de administración y con el artículo 20 de la ley 100 de 1993.

También la corte dijo en la sentencia SL 373 del 2021.

“...Lo anterior, no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho aquel según el cual quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora...”, conclusión que, si bien es cierta, también cuenta con errores técnicos y jurídicos frente a la responsabilidad, toda vez que no es responsabilidad extracontractual, **la responsabilidad es contractual y tenemos norma propia en la seguridad social, en el DECRETO 656 DE 1994**

Artículo 4º.- *En su calidad de administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, las administradoras son instituciones de carácter previsional y, como tales, se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de los perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados.*

Artículo que se debe interpretar en armonía con el artículo 10 y 12 del 720 de 1994, que nos habla sobre la responsabilidad de las administradoras.

Artículo 10. RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. *Cualquier infracción, error u omisión -en especial aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora respecto de la cual adelante de sus labores de promoción o con la cual, con ocasión de su gestión, se hubiere realizado la respectiva vinculación sin perjuicio de la responsabilidad de los promotores frente a la correspondiente sociedad administradora del sistema general de pensiones.*

Los costos que generen los convenios que celebren las sociedades administradoras del sistema general de pensiones con los promotores no podrán trasladarse, directa o indirectamente, a los afiliados.

Artículo 12. OBLIGACION DE LOS PROMOTORES. *Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.*

Ahora bien, señores magistrados en el presente proceso está probado que la entidad demandada incumplió sus obligaciones como administradora esto es, violo el principio del deber de información en el traslado de régimen pensional, en la seguridad social, el cual trae como consecuencia responder por los perjuicios ocasionados artículo 4 del decreto 656 de 1994, “a título de culpa” lo anterior tal y como se manifestó en el hecho 17 de la demanda donde se manifestó: que la diferencia pensional que arroja la prestación económica reconocida en el RPMCD en virtud del régimen de transición y la reconocida por el RAIS se traduce en perjuicio “....

DECIMO SEPTIMO: *La demandante actualmente disfruta una pensión de vejez otorgada por PORVENIR por el SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE \$689.455, se realizó la proyección de la pensión de vejez que la actora tiene derecho en el RPMCD de conformidad con el Decreto 758 de 1990 arrojando una mesada liquidada con el promedio de los últimos 10 años y una tasa de remplazo del 90% de \$1'074.647, superior a la otorgada en el RAIS lo que representa una diferencia de \$ 385.192.*

TOTAL SEMANAS	
SEMANAS COLPENSIONES	724
SEMANAS COTIZADAS PROVENIR	738
TOTAL SEMANAS	1.462
SEMANAS MINIMAS RPMCD	1000
SEMANAS MONTO 90%	1250

TOTAL DIAS	TOTAL SEMANAS	3600
		514,29

INGRESO BASE DE LIQUIDACION	1.194.052
SEMANAS COTIZADAS	514
PENSION A	
RECONOCER	1.074.647
PORCENTAJE APLICADO PENSION	90%
RECONOCIDA RAIS	689.455
DIFERENCIA	385.192

EDAD	RAIS	RPMCD
57 AÑO S	\$684.455	\$1'074.647.

CULPA IMPUABLE A LAS ADMINISTRADORAS DEL RAIS Generó un daño a la demandante, que se representa en la diferencia pensional que es de trato sucesivo, como consecuencia del incumplimiento a las obligaciones como administradora de fondo de pensiones “**violar el deber de información**” y que trae como consecuencia reparar los perjuicios ocasionados a la señora LUZ DOLLY.

Señores magistrados, la diferencia pensional tiene la naturaleza de derecho pensional, es decir fundamental en los términos del artículo 48 CPTSS, de trato sucesivo, por lo cual no puede verse afectado por el paso del tiempo. Sin embargo, se observa la contestación de la demanda de reconvención se propone como excepción a la demanda la siguiente.

“....RESPONSABILIDAD A TITULO DE CULPA – PARA PORVENIR: Señor juez la falta de información la indebida asesoría, el ocultamiento de información por parte de COLFONDOS Y DE PORVENIR llevan a que el acto jurídico de vinculación al RAIS sea ineficaz- inexistente y por lo tanto no genera efectos por lo que la entidad en los términos del artículo 4 del decreto 696 de 1994, los articulo 10 y 12 del decreto 720 de 1994 es responsable a título de culpa por los perjuicios sufridos a la señora LUZ DOLLY, y nadie puede alegar a su favor su propio dolo o culpa...”

Señores magistrados en el presente proceso está probado, el hecho generador a título de culpa en el presente caso “el incumplimiento al deber de información”, nexo causal entendida esta como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado; del daño, vemos que la diferencia pensional entre la mesada pensional recibida en el RAIS y la que hubiera recibido en el RPMCD en virtud del artículo 36 de la ley 100 de 1993, decreto 758 de 1990, genera un menoscabo en su mesada pensional lo que afecta la vida en condiciones dignas, diferencia pensional que se puede obtener al liquidar el IBL de la prestación en los términos del artículo 21 de la ley 100 de 1993 y la tasa de reemplazo del decreto 758 de 1990, con los IBC probados en el proceso con las historias laborales militantes en el proceso, por lo tanto señores magistrados en el presente proceso están probados todos los elementos axiológicos de la responsabilidad, además no está prescrito el derecho toda vez que la prestación fue reconocida en el RAIS 4 DE FEBRERO DE 2015, FOLIO 420-422 del PDF, se realizó reclamación administrativa año 2016, y la demanda se presentó en el año 2017, no pasando el termino trienal. Por lo anterior solicito al despacho conceder la reparación del daño imputable a las demandadas a título de culpa artículo 4 del decreto 656 de 1994, reparación que tener naturaleza de derecho fundamental “seguridad social” adicional a lo anterior tampoco puede operar la prescripción por lo siguiente.

Por su parte la Corte suprema de Justicia a Doctrinado la siguiente postura respecto a la imprescriptibilidad del derecho pensional, sentencia SL -8544 – DE 2016, RADICACION 45050 del 15 de junio de 2016, **CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, Magistrada ponente, postura que es aplicable en el proceso y de haber sido tenida en cuenta por el Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral la interpretación del artículo 488 CSY y 151 CPST hubiera sido diferente.**

*“...Para ese propósito, es conveniente empezar por recordar que, de acuerdo con el art. 48 de la C.P., **la seguridad social es un derecho subjetivo de carácter irrenunciable. Esto quiere decir que, en tanto derecho subjetivo, es exigible judicialmente ante las personas o entidades obligadas a su satisfacción y, en cuanto irrenunciable, es un derecho que no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular, como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo o por imposición de las autoridades.***

*Ahora bien, la exigibilidad judicial de la seguridad social y, en específico, del derecho a la pensión, que se desprende de su carácter de derecho inalienable, **implica no solo la posibilidad de ser justiciado en todo tiempo, sino también el derecho a obtener su entera satisfacción, es decir, a que el reconocimiento del derecho se haga de forma íntegra o completa.***

En efecto, el calificativo irrenunciable de la seguridad social no procura exclusivamente por el reconocimiento formal de las prestaciones fundamentales que ella comporta, sino que, desde un enfoque material, busca su satisfacción in toto, a fin de que los derechos y los intereses objeto de protección, sean reales, efectivos y práctica.

En este sentido, el derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran; si además se tiene en cuenta que una pensión deficitaria no cumple su propósito de garantizar una renta vitalicia digna y proporcional al salario que el trabajador devengó cuando tenía su capacidad laboral inalterada.

...(1º) La jurisprudencia de la Corte, desde hace muchos años, ha asegurado que la pensión genera un arquetípico estado jurídico en las personas: el de jubilado o pensionado, **que da derecho a percibir de por vida, una suma mensual de dinero.** En esa línea, no puede ser objeto de prescripción, dado que este fenómeno afecta los derechos, **más no los estados jurídicos de los sujetos**

En este orden de ideas, **las personas tienen derecho a que en todo momento se declare su status de pensionado y se defina el valor real de su pensión, teniendo en cuenta que este último aspecto es una propiedad indisoluble de la calidad que les otorga el ordenamiento jurídico.**

(2º) El estado jurídico de pensionado o jubilado implica el derecho a percibir mensualmente una renta, **producto del ahorro forzoso, del trabajo realizado en vida o de cuando se tenía plena capacidad para laborar. De ahí, el carácter vitalicio del derecho, inextinguible por prescripción,** y la connotación de tracto sucesivo de las prestaciones autónomas que de él emanan; todo lo cual significa que, si bien es imprescriptible el derecho a la pensión o, si se quiere, el estado de pensionado, sí son esencialmente prescriptibles sus manifestaciones patrimoniales, representadas en las mesadas pensionales o en las diferencias exigibles.

La imprescriptibilidad del derecho pensional y la vocación prescriptible de las mesadas pensionales obedece, además, a lo siguiente: respecto al estado jurídico de pensionado, si bien puede predicarse su existencia y la consecuente posibilidad de que sea declarado judicialmente, junto con todos sus componentes definitorios, no puede aseverarse su exigibilidad y, por ende, su vocación prescriptible, dado que, se itera, no existe un plazo específico para solicitar la definición de los estados jurídicos que acompañan a los sujetos de derecho...

Lo anterior señor juez, porque al contestar la demanda de reconvención se introducen nuevos hechos y nuevas pretensiones cuando se excepciona, por lo anterior solicito se REVOQUE la sentencia de primera instancia.

ALEGATOS DE PORVENIR S.A.

Considera mi representada, como bien se estableció por el fallador de primera instancia, que no es posible declarar la ineficacia de la afiliación de una persona que ya ostenta la calidad de pensionado del sistema general de pensiones, a raíz de la tesis que sostiene actualmente la H. Corte Suprema de Justicia; en principio, por cuanto la norma que regula los efectos de la ineficacia, recae para afiliados y no pensionados; además, que dicha calidad representa una situación jurídica ya consolidada y ajena al acto de vinculación que se impugna; y por último, la situación de ser pensionado implicó como en el caso del actor, sendos actos que comprometieron responsabilidad de terceros, y permitir un retorno como se pretende menoscabaría intereses de estos. En este orden de ideas, mi representada se encuentra conforme con el fallo en cuestión en este tópico.

ALEGATOS DE COLFONDOS S.A.

En los procesos de ineficacia, cuando involucran casos de pensionados, la Honorable Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, desde la sentencia de unificación del 14 de agosto de 2019, proferida dentro del proceso con radicación 05001-31-05007-2015-0195-01, fijó su posición con relación a este tipo de procesos, determinándose no hay lugar, a acceder a dicha declaratoria, cuando el afiliado ya no tenga esa calidad, por haber adquirido el estatus de pensionado, tal y como acontece con la demandante, posición confirmada en recientes pronunciamientos, vertidos entre otros, dentro de los procesos con radicados 015 2018 387 de Miriam del Socorro Correa Hincapié del 01 de diciembre de 2020, 017 2018 00068 de Ruth Victoria Cortés del 08 de febrero de 2021, sentencia proferida con Ponencia de la Magistrada, Nancy Gutiérrez Salazar y 015 2018 00724 de Bertha Ligia Méndez, con ponencia de la Magistrada María Eugenia Gómez Velásquez, del 10 de febrero de 2022, en las cuales se confirmaron las decisiones absolutorias de primera instancia, posición que reafirma con la sentencia SL373-2021 radicación 84475 del 10 de febrero de 2021, con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, línea que hasta el momento mantiene el citado Tribunal, (SL2432-2021, SL2388-2021, SL1789-2021 y SL1692-2021, entre otras decisiones).

La demandante al solicitar y obtener su pensión de vejez a cargo del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a cargo de Porvenir, celebró un nuevo acto jurídico, con el que se entendió superada la supuesta falta de información alegada en la demanda y continuó efectuando así actos de pertenencia y relacionamiento con este Régimen, porque decidió realizar todos los trámites requeridos para acceder a la pensión de vejez que actualmente percibe.

Es de anotar que el artículo 107 de la Ley 100 de 1993, expresamente señala que los cambios de plan de capitalización o de pensiones y de entidades administradoras, podrán realizarse siempre y cuando no se haya adquirido la calidad de pensionado, disposición que se declaró exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-841 de 2003, es decir, que la prohibición contenida en dicha norma, es plenamente vigente y ajustada a la Carta Política.

Por otra parte, se probó que la vinculación de la demandante al Fondo de Pensiones Obligatorias que administra mi representada, se dio con el lleno de los requisitos legales exigidos, por lo cual las pretensiones de la demanda, resultaban inviables, tal y como lo concluyó el A quo, porque no se cumplieron los supuestos consagrados en los artículos 13º y 271º de la Ley 100 de 1993, para la declaratoria de ineficacia, porque el traslado NO se efectuó bajo presión o coacción que vulnerara, la libre voluntad de afiliación como se encuentra acreditado en autos, con el respectivo de formulario de afiliación a Colfondos.

Para la fecha en que se realiza el acto jurídico de traslado de régimen, la actora contaba con total capacidad de goce y ejercicio, sin que repose material probatorio en autos que acredite lo contrario. No era exigible para la época de traslado como condición para la validez de las afiliaciones al RAIS, realizar proyecciones o cálculos o comparativos pensionales en ambos regímenes, pues esta obligación se estableció muchos años después, con la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015, por tanto, lo misma no se puede exigir de manera retroactiva.

La parte demandante, no hizo uso del derecho de retractarse de la afiliación al Fondo de Pensiones administrado por mí representada, ni se trasladó al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, en las oportunidades que concedió la ley, por el contrario, decidió realizar traslados entre AFPS del mismo régimen, Adicionalmente, Colfondos tiene a disposición de sus afiliados **cuatro (4) canales de comunicación, los cuales son; asesores, red de oficinas, página de internet y línea telefónica**, por lo que no es válido que predique una falta u ocultamiento de información. Al plenario fueron allegados los comunicados de prensa con los cuales mí representada mantuvo informados a sus afiliados de los cambios que se fueron presentando dentro

del Sistema General de Pensiones, los cuales constituyen un hecho notorio, que al igual que las afirmaciones indefinidas, no requieren prueba.

Es importante también señalar, que el Sistema General de Pensiones, está consagrado en la Ley, esta es de conocimiento público, sin que su desconocimiento de la ley sirva como excusa porque habiendo sido promulgada, se presume conocida por todos y además, los afiliados del Sistema General de Pensiones, también tienen una serie de obligaciones que cumplir, respecto de su panorama pensional, conforme lo señala el Decreto 2555 de 2010, artículo 2.6.10.14, numerales 1 a 8 contenido al que me remito y que estaba vigente para la fecha en que al demandante se le reconoció la pensión de vejez por parte de la AFP Porvenir.

Ahora bien, si con posterioridad al traslado de régimen pensional, las previsiones que tuvo en mente a decidir el traslado de régimen no se hubieren podido cumplir tal y como el demandante hubiera querido, esto es algo imprevisible, tanto para la parte afiliado como para la persona de la AFP que la asesoró en el traslado de régimen, luego el no cumplimiento de las expectativas económicas no es motivo para afirmar que fue engañada o mal informada, ni mucho menos constituye una causal para declaratoria de nulidad o ineficacia o irrogación de perjuicios.

Es de anotar que el artículo 112 de la ley 100 de 1993, dispone la obligación de aceptar a todos los afiliados que soliciten afiliarse al RAIS, al determinar: *“Las personas que cumplan los requisitos para ser afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad no podrán ser rechazados por las entidades administradoras del mismo”*. La demandante no se encontraba excluida del RAIS al tenor del artículo 61 de la ley 100 de 1993, por tanto; no podía mí representada rechazar su solicitud de afiliación.

A las actuaciones de los ciudadanos al interior del Sistema de Seguridad Social integral, también les resulta aplicable el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, según sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral: SL413-2018 Radicación n.º 52704 del (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018), con ponencia de la Magistrada CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, Y si bien esta tesis de la Corte Suprema de Justicia, abordó un tema pensional de sobrevivencia, sus argumentos son plenamente aplicables al caso que nos ocupa, pues todo lo probado en los procesos en relación con la afiliación de la actora al RAIS a través de Colfondos, no evidencia otra cosa, que la preeminencia de su intención real, no sólo de afiliarse al RAIS, sino de permanecer en el mismo, no sólo con su vinculación legal, sino con el pago de los respectivos aportes, trasladarse entre AFPS del mismo RAIS, realizar bajo su voluntad, todos los trámites tendientes a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez ante Porvenir, hechos que no pueden

considerarse de otra forma, sino como expresos actos de pertenencia de la actora con el Régimen del cual se encuentra pensionado, los cuales conforme a la providencia de la Sala de Casación Laboral antes mencionada, deben analizarse bajo el principio de la primacía de la realidad sobre las formas o incluso como expresas maneras de convalidar por ratificación su afiliación al RAIS, porque denotan correspondencia entre voluntad: De afiliación al RAIS y la acción: Esto es, los diferentes actos de relacionamiento o pertenencia con este régimen.

En todo caso, es más que notorio que las pretensiones de la demanda, se encuentran prescritas, porque entre la fecha en que se materializó el acto jurídico de afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda, transcurrió un lapso considerablemente superior a los términos de prescripción propios del Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, así como de las normas civiles, teniendo en cuenta que el artículo 1º de la ley 791 de 2002, redujo a 10 años el término de todas las prescripciones veintenarias establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas y que la Corte Constitucional mediante sentencia C-597 de 1998, con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, declaró exequible el artículo 1742 del CC, incluida la frase y en todo caso por prescripción extraordinaria, **máxime en este caso, que nos estamos frente a un derecho en construcción, sino frente a un derecho que ya está plenamente consolidado.**

En cualquier escenario, se solicita a la Honorable Sala de Decisión, mantener la decisión absolutoria, relacionada con el reconocimiento de perjuicios, que extemporáneamente vino a solicitar el apoderado de la parte actora en su recurso de apelación, en contra de mí representada, lo cual resulta totalmente improcedente en la medida en que este recurso, no es un mecanismo para discutir o solicitar pretensiones que no se consignaron en la demanda, que tampoco fue objeto de reforma. Se destaca Señores Magistrados, que la pretensión de perjuicios morales, tanto en las pretensiones principales como subsidiarias de la demanda, exclusivamente fue dirigida contra Porvenir y no contra Colfondos, por lo que se insiste, es totalmente improcedente que el apoderado de la parte actora, pretenda modificar sus pretensiones en relación al tipo de perjuicio solicitado y las entidades contra las cuales las dirige. En la etapa de fijación del litigio, sobre el tema de los perjuicios expresamente se señaló: *“De igual manera, se determinará si se prueba o no la indemnización por perjuicios morales a la demandante, que den lugar a condenar a PORVENIR S.A. para resarcir los mismos.”*

En este aspecto, nos remitimos a la sentencia del 24 de febrero de 2022, proferida por la Honorable Sala de Decisión Laboral con ponencia del Magistrado Carlos Jorge Ruiz Botero, dentro del proceso con radicado N° 05001 31 05 002 2018 00770 01, en la que se dijo: *“..., estando en contravía con el principio de congruencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso, que establece que la sentencia debe estar “...en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda... y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley...”. Y no obstante existir la posibilidad de pronunciamientos ultra y extra petita, dada la protección especial que legal y constitucionalmente tienen los derechos involucrados en los procesos de ese linaje, dicha facultad sólo está otorgada al Juez de primera instancia, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados, siendo claro que este argumento del recurso, constituye una petición nueva, que no puede ser considerado por esta Corporación...”*

Con lo anteriormente expuesto, bastaría para solicitar al Tribunal, se desestimara la apelación el recurso de apelación interpuesto por el demandante, en lo que respecta a Colfondos, Sin embargo, se traen a colación nuevamente, los efectos extintivos de la prescripción frente a la acción de resarcitoria de perjuicios, que se pretendió sin ninguna prueba en la demanda y solo respecto de Porvenir.

Ahora si en gracia de discusión, se aceptaran los argumentos extemporáneos contenidos en el recurso de apelación y que la acción para reclamarlos, no se encuentra prescrita, pues las pretensiones, quedaron totalmente en orfandad probatoria.

En los anteriores términos, se dejan sustentados los alegatos de conclusión en esta instancia.

4. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico a resolver se circunscribe a establecer si es legalmente procedente declarar la ineficacia del traslado de la demandante del RPM al RAIS, y si de ser procedente la referida ineficacia, debe condenarse a Colpensiones a seguir pagando a la demandante la pensión de vejez bajo las reglas del RPM. Así mismo habrá de establecerse, si hay lugar a condenar a PORVENIR S.A. y a COLFONDOS S.A. al pago perjuicios materiales en favor de la demandante.

6. CONSIDERACIONES:

Se resolverá el recurso de apelación, atendiendo el principio de consonancia que establece el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 en virtud del cual las decisiones de segunda instancia se circunscriben exclusivamente a los asuntos objeto del recurso.

Teniendo en cuenta el primer argumento presentado por el recurrente, en el que indica que pese a la posición jurisprudencial de la SCL de la CSJ en relación a la ineficacia de traslado de personas pensionadas en el RAIS, en el caso de la demandante pese a estar pensionada, debe tenerse en cuenta que nunca se le informó de manera completa, clara y suficiente sobre los beneficios o perjuicios que tendría al momento en que se trasladara al RAIS o de que aceptara la pensión en dicho régimen, ha de señalarse en primer lugar que, como lo señaló el a quo, y lo reconoce el recurrente, en este asunto se presenta una situación especial, referida a que a la demandante ella misma lo confesó en el interrogatorio de parte y además se encuentra acreditado documentalmente a folios 214 y 215 del expediente (documento 01 del expediente digital), se le reconoció pensión de vejez de parte de PORVENIR S.A. con garantía de pensión minina.

Teniendo en cuenta lo anterior, en primera medida, y al margen del análisis sobre el cumplimiento del deber de información que describe el recurrente, encuentra pertinente la Sala acoger, una vez más, la sentencia de unificación proferida por la Sala Especializada Laboral de este Tribunal el 14 de agosto del año 2019, en el proceso con radicado 05001-31-05-007-2015-01295-01, Magistrado ponente ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, en observación a lo previsto en el inciso último del artículo 35º del Código General del Proceso, concordante con el también último inciso del artículo 10º del Acuerdo PCSJA17-10715 del 25 de julio de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura, con la que se fijó precedente judicial unificado con relación a la ineficacia del traslado de régimen de quien ostente la calidad de pensionado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, providencia en la que se anotó lo siguiente:

“Este universo fáctico descrito por la Corte no incluye a los pensionados, pues aunque una de las sentencias fundadoras de esta línea trató de un pensionado que se trasladó a PORVENIR, se trata de un caso disanalógico, no inscrito en el precedente, por cuanto se trataba de una persona expresamente excluida del régimen de ahorro individual, al tener más de 55 años a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral, estando inmerso en el contenido del ordinal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993.

(...)

Pero las calidades de afiliado y pensionado ya han sido deslindadas por la Corte Constitucional, precisamente en un fallo con un claro enfoque consecuencialista. Al examinar la exequibilidad del artículo 107 de la Ley 100 de 1993, que limitaba

la posibilidad de los pensionados de trasladarse entre administradoras, la Corte arguyó lo que se esbozará enseguida. Esta es la disposición: Art. 107. CAMBIO DE PLAN DE CAPITALIZACIÓN O DE PENSIONES Y DE ENTIDADES ADMINISTRADORAS. Todo afiliado al régimen y que no haya adquirido la calidad de pensionado, podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro pensional a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado, o trasladarse a otra entidad administradora.

(...)

Tal como se señaló anteriormente, el artículo 107 de la Ley 100 de 1993 busca alcanzar al menos dos fines claramente identificables: (i) garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente de los recursos del régimen de pensiones de ahorro individual con solidaridad; y (ii) asegurar la estabilidad financiera y la rentabilidad de las inversiones de la entidad administradora o aseguradora.

Estos dos fines están estrechamente ligados a los fines constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad que orientan la prestación y ampliación de la cobertura de la seguridad social, en general, y del sistema general de pensiones, en particular. Por ello, garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente y asegurar la estabilidad y la sostenibilidad del sistema, constituyen fines legítimos y constitucionalmente importantes en un Estado Social de Derecho como el colombiano.

(...)

Es plausible que la diferenciación de las calidades de afiliado y pensionado a partir de los argumentos que se han expuesto y de toda la legislación que claramente los diferencia, verbi gratia, los artículos 13, literales b), e) y d), 87, 115 y 117 de la Ley 100 de 1993, permita apartarse del precedente de la Sala Laboral de la Corte sobre ineficacia de la afiliación, entendiendo que se está ante universo fáctico diverso cuando se trata de ciudadanos que ya se han pensionado.

Este Tribunal, a través de su Sala Primera de Decisión Laboral, con ponencia del Magistrado Hugo Alexander Bedoya Díaz, realizó una fértil distinción entre el momento de la afiliación y aquel en que se empieza a disfrutar la pensión, que refuerza la razonabilidad del enfoque que en el caso que nos ocupa. Dice así la providencia, con radicado 00873, proferida el 18 de septiembre de 2018, que constituye un comienzo de precedente horizontal:

Ahora, retrotrayéndonos al estudio de la improcedencia de que se declare la inexistencia del traslado en este caso en particular, la sala se remite a la sentencia SL17595-2017 con radicado 46.292 MP Dr. Fernando Castillo Cadena en donde en forma concreta se dijo "... Así, en el asunto bajo escrutinio, brilla por su ausencia, los deberes y obligaciones que la jurisprudencia ha trazado en aquellos casos de traslado entre regímenes, entre los cuales se destaca: (i) la información que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional; (...)", entendiéndose con este último aparte de la providencia que si la información exigida data desde antes de la afiliación y hasta las condiciones del disfrute de la pensión, ello implica, que una vez reconocida la pensión de vejez esa falta de información se entiende superada con la celebración del nuevo acto jurídico adelantado por la afiliada y que corresponde a la solicitud de la pensión de vejez a la sociedad Porvenir S.A y al reconocimiento y pago de la prestación económica, pues solo tenía la posibilidad de alegar la falta de información previo al disfrute de la prestación económica y no con posterioridad a ella, como ocurre en este evento.

Por último, ha de reiterarse por esta Sala que sostener la tesis de la ineficacia de la afiliación para pensionados del régimen de ahorro individual es un camino que puede conducir a situaciones del todo insostenibles, por cuanto la consolidación de ese nuevo estatus supone en muchos casos la participación de terceros de buena fe, como cuando se ha optado por pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia y se ha contratado con una aseguradora su pago. Las palabras de la Corte Constitucional, en la mentada sentencia C-841 de 2003, acuden con autoridad para esclarecer ese reductio ad absurdum. (...)

Así mismo, ha de señalarse que, en la Sentencia de Unificación antes citada, se trae a colación, el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, que establece, que la obligación de las AFP no se ciñe solamente a la antesala del traslado, sino también: *“durante toda la vinculación y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado”*, norma que permite inferir que una vez solicitada la prestación económica de vejez ante la AFP PORVENIR y obtenido el disfrute de la misma, la falta de información en el traslado inicial entre regímenes pensionales se refrendaría o convalidaría, ya que se trata de un nuevo acto jurídico acaecido el 4 de febrero de 2015, fecha en la cual la AFP PORVENIR S.A. le informó a la demandante que la pensión sería reconocida con garantía de pensión mínima como se lee a folio 214, reconociéndole posteriormente la prestación a partir del 1 de diciembre del 2014, tal y como se advierte en certificado emitido por PORVENIR S.A. que milita a folio 223 del plenario, prestación que fue ingresada a nómina de pensionados a partir de enero del 2015 conforme se anota en la certificación obrante a folio 214 del expediente digitalizado, aspectos que no puede pasar por alto esta superioridad, pues en los documentos referenciados se plasma la voluntad de la accionante de acceder a la pensión de vejez del RAIS.

La pensión se financió inicialmente con los ahorros existentes en la cuenta de ahorro individual y posteriormente con el bono pensional pagado mediante Resolución N° 16521 del 18 de abril de 2017 según se informó por parte de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al dar respuesta a la demanda (folio 415), suscribiendo un nuevo acto jurídico con efectos particulares y concretos, razón por la cual, una vez comenzó el disfrute pensional a partir de enero del 2015 (folio 215), adquirió la actora plenamente la calidad de pensionada, y por ende, siguiendo el criterio jurisprudencial sentado por este Tribunal se hace improcedente la declaratoria de ineficacia deprecada en la demanda.

Esta posición fijada por este Tribunal ha sido avalada por la Corte Suprema de Justicia, Corporación en reciente sentencia SL 373 de 2021, en la que abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado en el RAIS, de la siguiente manera:

“Es un hecho acreditado que Cárdenas Gil disfruta de una pensión de vejez desde el año 2008, en la modalidad de retiro programado, a cargo de Protección S.A. Esta circunstancia conduce a la Corte a interrogarse si es posible, bajo el manto de la ineficacia de la afiliación, que el demandante pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad, vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado al RPMPD.

Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto.”

En razón a las consideraciones de hecho y derecho expuestas en precedencia, se confirmará en esta instancia la decisión del Juez de primera instancia de negar la declaratoria de ineficacia del traslado de la demandante al RAIS, pues contrario a lo manifestado en el recurso de alzada, no son propiamente las consecuencias, o los actos administrativos, o la afectación a terceros derivada de la declaratoria de ineficacia lo que genera en últimas la decisión de negar la pretensión de ineficacia, sino la convalidación o refrendación, a través de un nuevo acto jurídico como lo es la solicitud de la pensión, de cualquier omisión o incumplimiento del deber de información en el que en algún momento hayan incurrido los asesores de la AFP PORVENIR S.A.

En lo que tiene que ver con el punto de apelación de la demandante, respecto de que, en el presente proceso se dan los presupuestos tal y como lo interpretó el despacho, que esa diferencia pensional que se solicita en la demanda, deba ser a cargo de PORVENIR S.A. porque el despacho apunto a esa situación, y en ese orden de ideas, se debe condenar a COLFONDOS S.A. y a PORVENIR S.A. a pagar a título de culpa la diferencia pensional dada la responsabilidad establecida en el artículo cuarto del Decreto 696, la Sala se abstendrá de resolver sobre tal aspecto, en atención a que el mismo no fue objeto de pretensión en la demanda, pues lo que se pretende con el recurso es el resarcimiento de presuntos perjuicios materiales referentes a la diferencia entre mesadas pensional, y en la demanda únicamente se pretendieron perjuicios morales.

Conforme los argumentos esgrimidos en precedencia, la sentencia de primera instancia será confirmada.

Las COSTAS en esta instancia estarán a cargo de la demandante por haber resultado vencida en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del

Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.000.000, repartidos en partes iguales entre los demandados.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de agosto de 2021 proferida por el JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso promovido por **LUZ DOLLY SÁNCHEZ CORREA** contra **COLPENSIONES, PORVENIR S.A., y COLFONDOS S.A.** y la **NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – OFICINA DE BONOS PENSIONALES**.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la demandante y en favor de las demandadas. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$300.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes por **EDICTO**.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ab1dec922b7906e1adde56084927b361d113d8081aad65fa5bdb92d7dbc7059b**

Documento generado en 06/10/2022 01:55:22 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>